



De izquierda a derecha y de arriba abajo: Francisco Pérez, director de investigación del Ivie; Miguel Jiménez, director de CincoDías; Fernando Fernández, profesor de Economía del IE Business School; Antonio Cortina, director adjunto del Servicio de Estudios Corporativos del Grupo Santander; José Antonio Vega, director adjunto de CincoDías, y Santiago Carbó, director de estudios financieros de Funcas, en la teleconferencia de esta mañana.

necesidad de un plan fiscal integral. "Vamos a requerir inversiones contundentes en materia sanitaria y hay que volver a apostar por la ciencia; harán falta ingresos, por lo que habrá que subir los impuestos", advierte. El catedrático se lamenta de la competencia desleal que ciertos Estados de la UE hacen en materia fiscal, y añade que, dado que todos los países necesitarán más ingresos, puede ser una oportunidad para llegar a acuerdos europeos en esta materia.

En el lado del gasto, Carbó menciona elevar el "gasto productivo", preparar estímulos y reformar la Administración ante la existencia de "puestos que probablemente no sean necesarios". El experto se detiene en las pensiones. "Hay que afrontar con realismo las cuestiones pendientes: las pensiones son insostenibles. Ya lo eran hace 10 años, ¿vamos a seguir haciendo esto: manteniéndolas igual de insostenibles en un contexto mucho peor? No digo que se haga un daño irreparable a las pensiones, pero sí buscar una sostenibilidad que ahora no tienen".

Para Francisco Pérez, la parálisis de tres meses plantea problemas de supervivencia tanto para empresas como para personas. "Se toman medidas muy pronto, pero creo que es necesario preguntar cuántas de ellas se van a traducir en que el dinero llega a aquellos agentes económicos cuya capacidad de supervivencia o de pago se quiere preservar".

Antonio Cortina incide en la importancia de tener

preparada una política para afrontar posibles confinamientos selectivos. El analista echa en falta mayor coordinación política, algo que daría más certidumbre al sector privado y fortalecería a España a la hora de proponer iniciativas en Europa. "En el medio plazo, lo esencial, dada la dimensión del riesgo, es que haya una amplia base política para hacer las reformas", destaca.

Decisiones valientes

"El defender la globalización y no caer en autarquías será clave en la recuperación" para Fernando Fernández, quien antes que hablar de más gasto o más impuestos prefiere poner sobre la mesa el crecimiento. El profesor indica que España necesitará crecer cerca de un 3% en un futuro, lo que implica impulsar políticas que flexibilicen el mercado laboral. "Nadie habla de la sostenibilidad de los funcionarios; España es el único país del mundo en el que el salario medio del sector público está por encima del sector privado. Esto no puede ser y es una fuente de vulnerabilidad futura".

Fernández sostiene que será vital diseñar políticas que permitan compatibilizar el crecimiento con proteger a los trabajadores de la desalarización en el mercado de trabajo. Pero, sobre todo, cree que será necesario que los políticos adopten decisiones valientes: "Crecimiento y decisiones difíciles. Lo contrario es engañarnos. El futuro va a estar muy complicado para una economía como la española".

Que el Estado entre en las empresas

► **Liquidez.** Entre las medidas para combatir los daños económicos, el Gobierno español anunció préstamos garantizados por el Estado por valor de hasta 100.000 millones de dólares. Los expertos coinciden en la importancia de que llegue esta liquidez para evitar la muerte de parte del tejido productivo. Si bien, algunos de ellos consideran que esta cifra puede resultar insuficiente ya que en términos absolutos es menor que la movilizada por otros países de nuestro entorno.

► **Participación.** Tanto Santiago Carbó como Fernando Fernández ponen sobre la mesa la necesidad de que el Estado entre en el capital de algunas de las empresas golpeadas vía préstamos participativos. Carbó especifica que no necesariamente se habla de nacionalizaciones, ya que sería algo temporal. "Todos tenemos el ejemplo de las aerolíneas porque es el caso más obvio", señala Fernández.

Ingreso mínimo vital, ¿una buena respuesta?

F. B. B.
MADRID

Entre las medidas económicas que el Gobierno está preparando se encuentra la aprobación del ingreso mínimo vital. Inicialmente, se hablaba de una renta de 500 euros para todos los ciudadanos que no tuvieran ingresos. Según el tiempo ha ido avanzando, la cifra ha disminuido hasta los 430 euros. El ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, prevé que este ingreso mínimo llegará al Consejo de Ministros en la segunda quincena de mayo.

"Quizás una ayuda temporal pueda ser necesaria; yo no estoy de acuerdo en crear una ayuda permanente", enfatiza Santiago Carbó, quien expresa una idea con la que coinciden el resto de expertos: "Hay familias muy perjudicadas que necesitan ayuda, pero creo que se ha aprovechado el momento actual para crear una figura permanente que a mí me deja muy preocupado en un país en el que en determinadas zonas territoriales ya hay desincentivos suficientes al trabajo".

Antonio Cortina lo considera necesario, pero cree que el hecho de que tenga visos de ser permanente la

convierte "en una acción más política que económica". "Dependerá de su diseño para que no desincentive el trabajo; sin tener claro cómo se define, es complicado opinar", reconoce.

Francisco Pérez tampoco ve la necesidad de hacerlo permanente, pero recuerda que hay parte de la población a la que no le llegan en este momento las ayudas que tienen que ver con el Estado productivo. "Hay una parte de las personas que esperaban ser contratadas en este segundo trimestre y no lo van a ser; si no tenían derecho a desempleo, quedarían fuera de ayudas sin la renta mínima".

Los analistas coinciden en que no es conveniente que sea permanente

Apuntan a una operación de sesgo político que añada más desincentivos al trabajo

La postura más crítica con la medida la adopta Fernando Fernández, al definir el ingreso mínimo vital como "una pésima idea en el peor momento posible", y tildarlo de "apuesta política por comprar voluntad y populismo barato". "Significa un desincentivo completo al trabajo y pone en duda la solvencia de las cuentas públicas españolas", critica.

En su opinión, no ayudará a los nuevos pobres de esta crisis, que serán los trabajadores que pierdan el empleo. "Es mucho más fácil reforzar los mecanismos actuales de distribución de renta que ya funcionan que generar nuevos mecanismos que, para cuando los pongamos en marcha, ya habrá pasado lo peor", valora.

Para el desempleo en la actividad turística, Fernández considera que se podría solventar permitiendo que aquellas contrataciones que se iban a hacer se plantearan vía ERTE. "El problema de la renta mínima es que le llega un cheque a todo el mundo independientemente de su situación laboral; es difícil de poner en marcha y, además, entramos en el tema de la complementariedad con las prestaciones autonómicas", concluye.

